



Consejo Consultivo de Canarias

DICTAMEN 164/2002

(Sección 1ª)

La Laguna, a 12 de noviembre de 2002.

Dictamen solicitado por la Ilma. Sra. Presidenta del Cabildo Insular de Gran Canaria en relación con la *Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por M.L.G.M., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 142/2002 ID)**.

FUNDAMENTOS

I

1. El objeto del presente Dictamen es el examen sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta de resolución formulada en un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial al Cabildo Insular de Gran Canaria por daños causados por el funcionamiento del servicio público de carreteras, de titularidad autonómica, cuyas funciones de mantenimiento y conservación tiene delegadas en virtud del art. 2.1.A.1 del Decreto 162/1997, de 11 de julio, dictado con la cobertura del Estatuto de Autonomía de Canarias, EAC (arts. 22.3, 23.4 y 30.18) y de la Ley 1/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, LCC (art. 5.2), en relación con los arts. 10.1, 32, 51 y 52 y Disposición Adicional Segunda, j), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, LRJAPC, con el Decreto 247/1993, de 10 de septiembre, la Disposición Transitoria Primera y anexo nº 2 del Reglamento de Carreteras de Canarias, RCC, aprobado por Decreto 131/1995, de 11 de mayo.

* PONENTE: Sr. Millán Hernández.

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.D.e) de la Ley 5/2002, del Consejo Consultivo, debiendo remitirla el Presidente del Cabildo actuante, según previene el art. 12.3 de dicha Ley.

II

1. El procedimiento se inicia a solicitud de M.L.G.M., formalizado mediante escrito de reclamación de indemnización por daños, producidos, según manifiesta, en el vehículo de su propiedad.

El hecho lesivo se produjo, conforme afirma la interesada, el día 25 de noviembre de 2001 sobre las 18,00 horas, al circular el citado vehículo por la carretera C-810, actualmente GC-2, en dirección a Las Palmas, cuando a la altura del p.k. 56.000, Andén Verde, se produjo un desprendimiento de piedras sobre la vía, ocasionando daños en el capó del vehículo.

2. La Propuesta de Resolución admite la responsabilidad patrimonial de la Administración actuante del servicio, considerando que se dan las circunstancias legal y reglamentariamente determinadas al respecto, y estima la reclamación formulada, al considerar probada la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el importe de la indemnización.

III

En el análisis de adecuación al ordenamiento jurídico de la actuación administrativa de referencia se tendrá presente, aparte de la ordenación del servicio público actuado y de la delegación de funciones, la regulación sobre responsabilidad patrimonial establecida por el Estado, a cuya legislación básica remite el art. 33 de la LRJAPC, sin que, por otra parte, la Comunidad Autónoma haya dictado norma alguna de desarrollo (arts. 32.6 EAC e inciso final del art. 149.3 de la CE).

Constituyen, por tanto, el marco normativo fundamental de referencia, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, LRJAP-PAC, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (en vigor al producirse el hecho lesivo), y el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, RPRP, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de mayo, aunque también deba atenderse a lo dispuesto en la

legislación autonómica sobre carreteras (Ley 9/91, LCC, y su Reglamento, aprobado por Decreto 131/1995, y el ya citado Decreto 162/1997).

IV

1. Está legitimada activamente la reclamante M.L.G.M., al haber acreditado ser titular del vehículo eventualmente dañado por el funcionamiento del servicio público de carreteras (arts. 31.1.a) y 139.1 LRJAP-PAC), y pasivamente el Cabildo de La Palma.

2. La reclamación se ha presentado dentro del plazo de un año establecido en el art. 142.5 de la LRJAP-PAC, y cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 139.2 de la propia Ley, pues el daño que se afirma inferido es efectivo, dado que su existencia está acreditada, es evaluable económicamente, porque puede ser compensado con la cuantía que importa su reparación, y está individualizado en el reclamante, porque se concreta en el menoscabo de un bien patrimonial de su propiedad, constituyendo, además, una lesión, por cuanto el interesado no tiene el deber jurídico de soportarlo.

3. En relación con el procedimiento, se ha superado el plazo de duración del procedimiento, que es de seis meses, conforme resulta de aplicar los arts. 42.2 de la LRJAP-PAC y 13.3 del RPRP.

Subsiste, no obstante, la obligación de resolver, aún en sentido estimatorio, como en efecto se ha propuesto al órgano resolutorio [arts. 42.1 y 43.4.b) de la propia LRJAP-PAC].

Finalmente, es de advertir que, siendo desde luego posible la interposición de recurso potestativo de reposición contra la resolución del procedimiento, que cierra la vía administrativa, la misma ha de efectuarse ante el órgano que la dictó (arts. 116.1 y 142.6 LRJAP-PAC), el cual, salvo delegación expresa al efecto que no consta en el expediente, no es el Consejero de Obras Públicas del Cabildo, sino su Presidente. Pero, si existiera tal delegación, no procedería que el órgano competente para resolver, supuestamente el Consejero de Obras Públicas, diera su conformidad a la Propuesta de Resolución antes de ser dictaminada.

V

1. Teniendo en cuenta las alegaciones de la reclamante sobre el hecho lesivo y su causa, sucediendo en una zona propensa a desprendimientos como consecuencia de la orografía del lugar, ha de señalarse que, a la vista de la documentación disponible, en particular de la declaración testifical valorada positivamente por el instructor, está suficientemente acreditada la generación del hecho lesivo y el daño sufrido por la interesada, cifrándose la cuantía de la reparación del daño se ha cifrado en 531,24 €.

2. Establecida la conexión entre el hecho lesivo y el daño sufrido, ha de dilucidarse la existencia de nexo de causalidad del daño con el funcionamiento del servicio.

Dicho nexo resulta, en este supuesto, innegable, pues el servicio público de carreteras comprende el mantenimiento y conservación de las mismas y de sus elementos funcionales y zona aledaña, de manera que estén libres de obstáculos o riesgos que impidan su uso suficientemente seguro para el fin que les es propio, según resulta de los arts. 5.1, 22.1, 24 a 30 y 49 a 51 LCC y concordantes de su Reglamento.

No concurren, por otra parte, en el supuesto que se analiza circunstancias obstativas de la responsabilidad, como la fuerza mayor, acontecimiento, extraño o ajeno, imprevisible o inevitable (aún siendo previsible) por irresistible, que excede de los riesgos propios del funcionamiento o derivados de la naturaleza del servicio; y tampoco consta que haya mediado intervención de tercero alguno, que la interesada tenga el deber jurídico de soportar el daño, ni que la conductora del vehículo circulase sin la debida precaución.

De lo expuesto resulta que el funcionamiento del servicio de conservación de la carretera y la producción del daño se encuentran en relación de causa a efecto y, por ende, que, en virtud de lo dispuesto en el art. 139.1 de la LRJAP-PAC, recae sobre la Administración responsable de tal servicio la obligación de repararlo.

3. Respecto a la cuantía de la indemnización, el Consejo Consultivo considera que debe ascender al coste real de la reparación correspondiente al daño efectivo sufrido, 531,24 €, suficientemente acreditado por la reclamante.

No obstante, dada la demora al resolver, no imputable al afectado, resultan de aplicación al caso las previsiones del art. 141.3 de la LRJAP-PAC.

C O N C L U S I Ó N

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho al concurrir relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio de carreteras, si bien la indemnización deberá determinarse en la forma expresada en el Fundamento V de este Dictamen.